

PARTIDO DE ESTADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Telésforo Nava Vázquez*

Desde que el partido de Estado surgió en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR), hoy conocido como Partido Revolucionario Institucional (PRI), no ha tenido como interés fundamental promover la participación ciudadana en la vida política nacional, ni se ha preocupado por incentivar que la población con plenos derechos para hacerlo sufraque y elija a sus representantes y a sus gobernantes, desde el regidor y el presidente municipal hasta el senador y el presidente de la República.

Como es sabido el PNR fue la hábil e inteligente fórmula política instrumentada por el general Plutarco Elías Calles, con la finalidad de concluir la etapa de violentos enfrentamientos entre las diferentes fuerzas revolucionarias que componían el heterogéneo bloque que salió triunfante de la contienda armada iniciada en 1910, que se sentían con el derecho, y obviamente con la fuerza, para participar en el botín que suponían les había heredado la Revolución Mexicana. Con la creación de aquel partido se institucionalizó la distribución pacífica, hasta donde fue posible, de los puestos del aparato estatal, de las representaciones populares y de todas las canonjías y negocios que pudieron lograrse al amparo de la frondosa sombra del Estado posrevolucionario que en aquellos años se estaba creando.

Legalizado y pacificado el reparto del botín *revolucionario*, las instituciones estatales podían, con más tranquilidad, tiempo y recursos, abocarse a la reestructuración económica del país. La recomposición de la vida política también se

asumió como una tarea de Estado en todos los aspectos. Para cumplirla el instrumento sería el PNR.

Desde la primera contienda electoral en que se presentó el partido de Estado (recién fundado como PNR), llevando como candidato a Pascual Ortiz Rubio, su actuación no fue la del partido que busca convencer a la mayoría de la población para obtener de ella los sufragios suficientes que le den el triunfo en las urnas y, por lo tanto la legitimidad ciudadana. La candidatura de Pascual Ortiz fue producto de un forzado acuerdo de la mayoría de las fuerzas revolucionarias en las que se impuso a final de cuentas la opinión del Jefe Máximo, lo cual fue elemento fundamental para la rebelión escobarista. Cerrado el acuerdo entre las fuerzas revolucionarias, el siguiente paso fue imponer al conjunto de la población al candidato oficial.¹

Desde luego hubo campaña electoral, el candidato del PNR recorrió el país, pero se hizo evidente que no era tanto para convencer, sino para cumplir con la formalidad. De antemano ya estaba garantizado que el triunfo no dependería ni del carisma del candidato ni de sus cualidades de estadista (que de eso y más carecía Pascual Ortiz Rubio), porque de ser estos los requisitos se hubiera seleccionado a otra persona para contender por la presidencia del país. El Estado y su también naciente sistema político se encargaron de asegurar que el vencedor de aquella disputa electoral fuera el candidato de ellos, el del partido de Estado. Poco importó que José Vasconcelos desarrollara una fuerte y muy concurrenada campaña electoral opositora que ganó bastantes adeptos y simpatías, que a muchos llevó a pensar en su inminente triunfo. Oficialmente ni siquiera se le reconoció una votación elevada. De las diferentes informaciones que se dieron en el transcurso de una semana, la cifra más alta ape-

* Profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

nas superó el 5.4%. Ante tal situación Vasconcelos declaró: "No fui derrotado. Fui engañado".²

Con esa práctica política, nació, se desarrolló y ha llegado a su crisis el partido de Estado. Ha enfrentado elecciones realmente competitivas pero jamás ha reconocido lo que la realidad de las urnas ha dictaminado. Tal parece que nunca se han proporcionado resultados electorales verídicos, ni siquiera cuando únicamente participó el candidato oficial en la campaña electoral, como fue el caso de las elecciones para presidente en 1976, en las que sólo fue inscrito José López Portillo.

Si en las décadas anteriores el Estado ejerció una creciente intervención en la vida económica, administrando y regulando la competencia; en el plano político su intromisión aún fue mayor; llegó a tal grado que logró un monopolio casi perfecto en beneficio de su partido, a través del cual se dedicó a regimentar la vida democrática en función de sus propios intereses. La competencia política real, en las urnas, en el parlamento y en todas las instancias donde puede darse, fue completamente nulificada.

Partido político y corporativismo

Desde 1929 el Estado se ha encargado de garantizar a su partido el monopolio político de lo fundamental de la vida nacional; lo colocó en una especie de invernadero, que aseguró su crecimiento y fortalecimiento, aislándolo así de toda competencia que le pudieran hacer las demás organizaciones políticas. Si en la vida económica la intervención estatal ahijó una burguesía parasitaria que se acostumbró a la ganancia fácil generada en lo fundamental por el proteccionismo estatal, en el quehacer político la situación fue peor. El PRI ha vegetado a costa de los recursos económicos del Estado y de todo su apoyo para asegurarse triunfos electorales, los obtenga o no en las urnas.

Con el fin de afianzar ese monopolio priísta, el Estado ha evitado el desarrollo de otros partidos, obviamente opositores. Para ello se ha valido de la legislación electoral que, hasta antes de la reforma electoral realizada por José López Portillo, exigía el cumplimiento de una serie de requisitos prácticamente insalvables para registrar un partido. De esa forma, durante bastante tiempo mantuvo registrados a dos partidos paleros (PPS y PARM) que le han servido de comparsa y al PAN que resultaba el único partido opositor, con una ideología incluso más a la derecha que la del mismo PRI.

Con esos tres partidos se trataba de mostrar la supuesta pluralidad del régimen político y una hipotética competencia electoral. Empero, el control de los procesos electorales, su organización y el cómputo de los votos siempre han quedado en manos del gobierno. Todavía hoy ésto sigue sucediendo. Por ejemplo, nada más grotesco, y que muestra la fuente de toda la antidemocracia en las elecciones, que la Comisión Federal Electoral fuera presidida por el Secretario

de Gobernación. Aquí puede aplicarse muy bien la sabiduría popular que dice que "el que parte y reparte se queda con la mayor parte". O como lo anotó Daniel Cosío Villegas en su reflexión sobre el sistema político mexicano: "el PRI y el gobierno hacen el escrutinio de los votos, y, según el viejo dicho, 'el que escruta elige'".³

Copando el PRI la casi totalidad de los espacios políticos, a los demás partidos con registro les concedían algunas curules permitiéndoles con éstas desarrollar cierta actividad política. Al resto de las organizaciones opositoras existentes y que realmente lo eran, se les negaba su registro; y, de manera especial, se procuró mantener marginadas a las que sustentaban una ideología de izquierda. De esa forma se ha marginado a las organizaciones políticas opositoras, con registro o sin él, de la vida política nacional, permitiéndoseles actuar sólo en los márgenes de la sociedad, siempre y cuando no rebasen ciertos límites, porque de hacerlo han tenido que sufrir el peso de la represión estatal.

Incluso cuando José López Portillo lleva a cabo su reforma política, es el gobierno quien determina a qué partidos se da o no el registro. A quiénes se les otorga éste ya sean de derecha o de izquierda, se busca controlarlos por diversas vías, como se verá más adelante. Igualmente, es ampliamente conocido cómo el Estado corporativizó a las organizaciones sindicales, populares y campesinas, para asegurar el monopolio político del PRI y controlar la participación ciudadana, con lo cual conculcó a sus agremiados y a ellas mismas su independencia política y organizativa, supeditando éstas a los intereses de la clase dominante cuyo representante es el Estado. Por esa vía la democracia también desapareció de dichas organizaciones, la elección de sus representantes y las decisiones fundamentales quedaron en manos de sus respectivas burocracias, que se encuentran estrechamente ligadas al aparato estatal.

No es el corporativismo estatal el tema de este trabajo, únicamente lo anotamos para señalar el rol que ha jugado en la limitación de la participación ciudadana. Sobre ese tópico existe abundante bibliografía que puede consultarse.⁴ Sin embargo, es pertinente destacar que para la oposición, especialmente la de izquierda interesada, la participación en los sindicatos prácticamente estaba vedada, de tal forma que la actividad que siempre se ha desarrollado en esa instancia la ha realizado de manera clandestina, teniendo que afrontar las consecuencias de la represión de las fuerzas estatales y de los pistoleros de charros y patronos. Así mismo, todo movimiento que ha rebasado a sus burocracias, también por lo general ha sufrido la represión estatal que muchas veces concluye en el asesinato o de menos el encarcelamiento de sus dirigentes.

Crisis económica y crisis política

Que el régimen político posrevolucionario desde su inicio se haya sustentado en la antidemocracia, en el menosprecio a la participación ciudadana y al sufragio como forma de legitimación de todo sistema político democrático, no quiere

decir que siempre haya carecido de legitimidad. Sin duda el sistema político tuvo su época en que gobernó con cierto consenso y también gozó de legitimidad, pero lo cierto es que ésta no la lograba en las urnas, con el libre sufragio de los ciudadanos.

La legitimidad priísta tuvo dos sustentos fundamentales, profundamente relacionados e interdependientes. Por una parte el partido de Estado y sus diferentes gobiernos se autotombraron herederos y albaceas de la Revolución Mexicana, y por lo tanto defensores de las demandas más sentidas de las masas mexicanas. A ese uso y abuso del discurso reivindicador de la Revolución de 1910, pudo dársele contenido material que asegurara su impacto sobre los trabajadores mexicanos, gracias al desarrollo económico que se vivió principalmente en los años cincuenta y buena parte de los sesenta, con el que se logró una ampliación del empleo y permitió mejoras salariales para ciertos sectores de los trabajadores, pero también proporcionó los recursos económicos a través de los cuales el Estado generó una suerte de actividades de beneficio social que favorecieron a amplias capas de la población.⁵

De esta forma el discurso reivindicador de la Revolución Mexicana, que prometía mejorar las condiciones de la población trabajadora, creaba la expectativa de que probablemente en un futuro ciertamente se alcanzarán esos beneficios. Cada sexenio, con el cambio de Presidente de la República se renovaban dichas esperanzas, cada nuevo presidente retomaba el discurso de la revolución y en su nombre prometía resolver las demandas de la población trabajadora; igualmente las obras sociales o cualquier beneficio para los trabajadores era presentado como un avance más de la revolución.⁶

El problema para el régimen priísta se empieza a presentar cuando el crecimiento económico muestra algunos signos de agotamiento. El desempleo rebasa los márgenes en que se le había logrado contener; los empleos bien remunerados, a los cuales aspira la clase media que egresa de las instituciones de educación superior, tienden a escasear para después prácticamente desaparecer; los salarios se deterioran igualmente debido al incremento de los precios; el Estado cada vez cuenta con menores recursos para satisfacer la creciente demanda de servicios para el beneficio social, los cuales han sido aprovechados por amplias capas de la población; pero, asimismo, la menor capacidad financiera del Estado le resta a éste la posibilidad de apoyar de manera más general a la clase dominante, como venía haciendo desde hacía décadas y se ve precisado a seleccionar a quienes recibirán su apoyo.⁷

Desde fines de los años sesenta ya el agotamiento del modelo económico con el cual el país logró un crecimiento sostenido y estable, pero la crisis asoma su rostro —concatenándose con la crisis general que también después de décadas de su sufrirla agobia al mundo capitalista— al inicio de los años setenta. En 1971 se registra la primera recesión de este periodo. En 1976 la curva descendente del ciclo capitalista arrolla al peso, que por más de 20 años se había mante-

nido estable, y se acentúa la crisis. En ese momento se presenta el Fondo Monetario Internacional (FMI) para dictar al gobierno mexicano (Luis Echeverría Álvarez va de salida y está llegando José López Portillo) las medidas que deben instrumentarse según la política económica general que el imperialismo norteamericano está impulsando en diversos países.⁸

En aquellos años —fines de los sesenta y en el transcurso de los setenta— también se hace evidente el desgaste del sistema político dominante y su avance hacia una seria crisis. El heraldito que anuncia esta nueva realidad política es el movimiento estudiantil de 1968, cuyas demandas democráticas ponen en aprietos al régimen priísta que se muestra incapaz de darle una salida consensada y, como es sabido, recurre a la más salvaje violencia para acabarlo. Después vino el movimiento estudiantil de 1971, que también fue enfrentado de forma por demás violenta el 10 de junio. De inmediato hizo su aparición una fuerte insurgencia sindical que cuestionaba el control corporativo que el Estado mantenía sobre los sindicatos. En este ascenso de la lucha de los trabajadores el Estado no sólo mostró su pérdida de control sino también su incapacidad para crear nuevas alternativas políticas. De esta forma recurre a la violencia, en julio de 1976 con el ejército evita que los electricistas de Rafael Galván estallen su huelga; un año después, en 1977, introduce a las fuerzas policíacas a la UNAM para romper la huelga que mantenía el sindicato de esa casa de estudios.

En busca de un nuevo proyecto

Desde la crisis política vivida con el movimiento estudiantil de 1968, hubo sectores de la clase dominante y de su aparato político que comprendieron que el modelo económico en el que habían basado el crecimiento económico de los últimos años anteriores, estaba desgastado y era indispensable empezar a reestructurar un nuevo modelo de acumulación. Igualmente atisbaron que el sistema político mostraba signos de anquilosamiento que le impedían reaccionar adecuadamente ante situaciones conflictivas, por lo que también se hacía necesario revitalizarlo.

Los intentos por iniciar esos cambios datan del periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, quien a partir de sus discursos como candidato a la presidencia realiza un diagnóstico crítico del modelo económico anterior y de las deficiencias del sistema político, en particular del corporativismo sindical y la antidemocracia. Mucho fue lo que este presidente dijo que se haría, pero sus resultados fueron más bien pobres, tanto en el plano económico como político. Tampoco es interés del presente trabajo entrar a analizar las políticas desarrolladas durante el echeverrismo, por lo que sólo resta agregar que los cambios tan pregonados, pero muy poco realizados, se mantenían dentro de la lógica del discurso reivindicador de la Revolución Mexicana. Incluso el discurso echeverrista ponía énfasis en el aspecto naciona-

lista, que muchas veces desembocaba en un populismo que bastante irritó a los grandes empresarios del país, quienes por cierto realizaron una fuerte oposición militante a las políticas planteadas durante ese sexenio.¹⁰

Al inicio del sexenio de José López Portillo se planteó la reestructuración de la economía a partir de los dictados del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el *boom* petrolero que se vivió en los últimos años de la década de los setenta y muy al inicio de los ochenta, llevó a que la política oficial se apartara de los lineamientos fondomonetaristas y se encaminara por sendas faronáticas basadas en el sueño de que la riqueza petrolera sería perpetua, de ahí la célebre frase de López Portillo diciendo que el problema del país era cómo administrar la abundancia.¹¹

Durante ese sexenio se efectúa una Reforma Política inspirada por uno de los más brillantes ideólogos que ha tenido el país, Jesús Reyes Heróles. Con ésta se abre el sistema electoral para dar cabida a nuevos partidos, tanto de derecha como de izquierda. Empero la reforma queda al nivel netamente electoral, y se limita a otorgar el registro a nuevos partidos escogidos de antemano. Al resto del sistema político se le deja intacto. De tal forma que se efectúan cambios que en lo esencial no atacan la antidemocracia reinante. Se deja incólume al corporativismo sindical con su cauda de antidemocracia y subordinación al Estado e incluso desde la Secretaría de Gobernación se notifica a los partidos registrados, en especial a la izquierda, que se les legaliza para que hagan política en el ámbito electoral, advirtiéndoles que deben retirarse de los sindicatos.¹² Igualmente el control de los procesos electorales se sigue dejando completamente en manos de los organismos estatales.

No obstante que la ley respectiva establece los requisitos para que un partido obtenga su registro, es a final de cuentas el gobierno quien decide de manera arbitraria si se otorga o no. Hasta la fecha así sigue sucediendo, a pesar de las diferentes reformas a la legislación electoral. Si bien los partidos de izquierda, que debido a la reforma lopezportillista obtuvieron su registro realizaron una adecuada caracterización de la misma, advirtiendo que se pretendía refuncionalizar el sistema electoral con la pretensión de canalizar por las apacibles vías parlamentarias el descontento social que ya se manifestaba de manera turbulenta en diversas luchas, finalmente acabaron adecuándose a las políticas gubernamentales.¹³ En cierta forma fueron semicorporativizados y perdieron parte de su independencia política. Los dos mecanismos más usados por el gobierno para lograr este fin fueron: sumir a los partidos con registro en una desenfrenada vida electoral para que pudieran preservar el reconocimiento legal, lo cual los llevó a abandonar otros trabajos; y, por otra, se les hizo dependientes de las finanzas oficiales otorgadas a través de las prerrogativas que por ley les correspondían, amén que el gobierno siempre se muestra generoso para proporcionar partidas extras, en efectivo y en especie. Obviamente esto no lo hace de manera gratuita, tiene un costo político. Así los partidos con registro termina-

ron atados con lazos de oro a los dictados de la política gubernamental.

A pesar de las maniobras gubernamentales, entre ellas usar a la izquierda con registro, el movimiento social continuó su marcha. La participación ciudadana en la vida política, tan negada por el gobierno, se ha manifestado a través de sus múltiples luchas escenificadas en las fábricas, en las escuelas, en las oficinas, en las colonias pobres, en el municipio o en el ejido.¹⁴

El neoliberalismo y el fin de la legitimidad priísta

A partir del segundo semestre de 1981 la economía mexicana cae en una crisis de magnitudes sin precedentes; su detonador es el derrumbe de los precios del petróleo en el mercado internacional, con lo cual la enorme deuda externa adquiere un enorme peso negativo en las finanzas estatales. El corto paréntesis abierto a la crisis con el *boom* petrolero, llegó a fin de manera por demás abrupta. De nueva cuenta el FMI hace acto de presencia recriminando el que no se hayan seguido sus consejos y replanteando sus ya conocidas fórmulas económicas de corte neoliberal. De la quimérica administración de la abundancia se pasa a la aplicación de las políticas fondomonetaristas, cuyo objetivo es cargar el peso de la recuperación y reestructuración económica sobre los hombros de los trabajadores.

La agudización de la crisis que precipita el peso mexicano por un tobogán de devaluaciones profundas, hace acto de presencia al final del sexenio lopezportillista y cuando ya se conoce la identidad del nuevo ungido que en diciembre de 1982 asumirá la presidencia del país, Miguel de la Madrid Hurtado. Durante este mandato se va a replantear lo que desde hacía dos sexenios se pretendía desarrollar: la reestructuración de la economía para orientarla hacia el establecimiento de un nuevo modelo económico que garantice a la clase dominante poder enfrentar de mejor forma la crisis y salir lo más airoso posible de ella. Las políticas que se van a implementar coinciden plenamente con las que desde tiempo atrás se desarrollan en el plano internacional en otros países, tanto dependientes como imperialistas.

La política económica que se empieza a instrumentar a partir de diciembre de 1982 busca que el nuevo eje de la acumulación de capital se asiente en el mercado internacional, para lo cual ve como indispensable una mayor integración de la economía mexicana a la internacional, especialmente a la estadounidense, con la cual se comparte una enorme frontera y se realiza más del 60% de las transacciones comerciales de carácter internacional. En esta perspectiva se pretende que la economía mexicana pase a ser fundamentalmente exportadora de bienes manufacturados, lo que implica una indispensable modernización de la planta industrial y una reestructuración general de las relaciones en-

tre el capital y el trabajo con la finalidad de reducir lo más posible los costos de producción, con miras a la competencia internacional.

Para avanzar en la transformación de la economía mexicana los artifices de esa política ven también necesario ampliar la participación directa del capital extranjero en todos los ámbitos posibles, mostrando su disposición a desnacionalizar la economía bajo el argumento neoliberal del adelgazamiento del Estado, o sea la reducción, a su mínima expresión, de la intervención estatal en la economía. Lo que fundamentalmente se ofrece al capital transnacional para que se anime a invertir en el país son dos ventajas comparativas: mano de obra excesivamente barata y la cercanía al enorme mercado estadounidense.¹⁵

La instrumentación de esta política ha tenido como una constante el ataque sistemático contra todas las conquistas que los trabajadores (obreros, empleados, profesores, etc.) obtuvieron a través de décadas de lucha, algunas de ellas codificadas en los contratos colectivos de trabajo y otras plasmadas en el gasto social del Estado. Esto explica la ofensiva frontal contra los contratos colectivos de trabajo para desmantelarlos, sacando de ellos una serie de beneficios con el fin de asegurar la recomposición de las ganancias de los empresarios y rehacer la acumulación de capital.

Igualmente se comprende la drástica reducción del gasto social del Estado, lo que ha implicado un deterioro de los servicios médicos y en general de la salud, de la construcción de viviendas, de los servicios urbanos, de la educación, entre otros, con la obvia finalidad de que en esta época de crisis y menores recursos estatales, los que existan se dediquen a apoyar por diversas vías la actividad empresarial, especialmente la grande y sobre todo la orientada al mercado externo.¹⁶

A esta incisa arremetida contra los asalariados, se suma la apertura indiscriminada de la economía a la competencia externa, tanto al nivel de las mercancías como de los capitales, lo que ha traído como consecuencia la quiebra de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y una tendencia a la desnacionalización de la economía.

El ritmo apresurado de la aplicación de esta política neoliberal durante el sexenio de Miguel de la Madrid y su profundización en lo que va del periodo de Carlos Salinas, fue lo que quizá durante sus primeros años no permitió observar a diferentes analistas y políticos el cambio que ésta implicaba en el discurso y actuar político de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana: de hecho la ruptura con la tradición que les había garantizado su legitimidad. Los efectos de esa fractura histórica se verían en el futuro tanto al seno del aparato político dominante como en la reacción y visión que las masas tendrían de los últimos gobiernos.

Los trabajadores durante los primeros años de esta ofensiva neoliberal fueron sorprendidos, agrupados en organizaciones sindicales que no defendían sus intereses, completamente burocratizadas e integradas al aparato estatal. De tal

forma que la oposición a dicha política implicaría la democratización o rebasamiento de sus direcciones sindicales. Por tal motivo la resistencia a esa política se da de manera clara y continua a partir de la huelga de los trabajadores de Sircatsa en 1985.

Después vino la huelga de los trabajadores de la Fundidora de Monterrey y otras luchas como las escenificadas en empresas automotrices como Dina, Renault y Volkswagen, en electricistas, en telefonistas, en Altos Hornos, en Aceros Ecatepec, en Ford Cuautitlán y en otras empresas en donde los trabajadores empezaron a resistir la ofensiva patronal que contaba con todo el apoyo estatal. En medio de esas batallas sucedieron dos fenómenos sociales que tuvieron profundas repercusiones. Por una parte estuvo la lucha de los damnificados de los sismos de 1985 que se impusieron a las tentativas estatales de marginarlos y no resolverles sus problemas, lo que los llevó a una amplia organización y experiencia política; por otra, se dio la lucha del Consejo Estudiantil Universitario, la primera batalla de masas contra la política de reestructuración, logrando frenarla en la UNAM y en los hechos asestándole una primera derrota.

Al seno del aparato político dominante la política neoliberal llevó a fuertes fricciones que desembocaron en el surgimiento de la Corriente Democrática del PRI y a su posterior ruptura para lanzar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, oponiéndola a la de Carlos Salinas, quien había sido designado para continuar con la política ejecutada durante el periodo de Miguel de la Madrid. La Corriente Democrática reivindicó en lo fundamental la parte más radical del discurso de la Revolución Mexicana y su exponente más claro y con mayor peso histórico resultó su candidato presidencial.

Lo que posteriormente sucedió ya es historia. La campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas permite que todos los agravios que el sistema priista había infligido a la población tengan un canal de expresión, así sea a través del voto el 6 de julio de 1988. De nada sirvieron las corporaciones oficiales que habían prometido 20 millones de votos para el candidato del partido de Estado. Salinas de Gortari fue derrotado en las urnas. La escisión del PRI, del partido de Estado, aunque se trató de negar, tanto en los círculos oficiales como, irónicamente, en sectores opositores, fue grave y atravesó tanto al sistema político como al mismo Estado.¹⁷ Esta crisis del sistema dominante, producto del descontento social que se fue acumulando en años de política neoliberal, tuvo como corolario la derrota de Carlos Salinas en las urnas. Amplias capas de la población que habían sido marginadas de las decisiones nacionales fundamentales, negándose así su participación ciudadana en la vida política, respondieron con esa intervención electoral. Después del 6 de julio de 1985 no quedó duda que la legitimidad del régimen priista era cosa del pasado, el consenso ciudadano se desplazó hacia la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. El neoliberalismo cosechaba los frutos políticos que la aplicación de su política económica le daba.

Neoliberalismo y modernización política

Durante su campaña electoral Carlos Salinas manifiesta que profundizará la reestructuración económica iniciada en 1982, y empieza a propagandizarla como modernización económica; pero igualmente destaca la necesidad de acompañarla con el complemento necesario de una modernización del sistema político que permita una real competencia política de las diversas fuerzas electorales y fomente una mayor participación ciudadana. De esta forma le sale al paso a la muy señalada y criticada contradicción entre un proceso de cambio en la economía a la par que se sostiene un sistema político arcaico, basado en el fraude electoral y en la corporativización de las organizaciones sociales al aparato estatal.

La superación de esa contradicción se plantea que debe tener como punto de partida una menor desigualdad económica, que es precisamente lo que más ha reportado la transformación económica.

En *El reto democrático*—discurso pronunciado en la ciudad de Puebla el 22 de abril de 1988 y considerado el proyecto de cambio político—Salinas de Gortari define su perspectiva democrática: “He querido venir a Puebla a hablar del futuro de la democracia mexicana, porque quiero dejar constancia de mi convicción. Estoy convencido de que la Nación, para ser más independiente, justa y fuerte, debe ser cada vez más democrática”. Páginas más adelante amplía esa idea: “Sin la democracia electoral desvirtuamos el proyecto de la Revolución Mexicana, con democracia electoral, nada más, dejamos incompleta y fracturada la ideología de la Revolución Mexicana. Porque la Revolución reconoce que el ejercicio de la libertad no se da en abstracto, sino en condiciones sociales y económicas concretas: porque sabe que en la ignorancia, en la marginación y en la desnutrición, la expresión de la voluntad popular no es informada ni libre ni estable. Porque aislada de todo contexto de desigualdad, la democracia electoral es fácil presa de quienes tienen más poder y más capacidad dentro de la sociedad”.¹⁸

El pronunciamiento por una modernización política que asegure el avance democrático de la sociedad, más que tener que ver con una convicción profundamente democrática, es la respuesta a los obstáculos políticos con los que se tropieza la reestructuración económica. Por una parte la burocracia sindical se resiste a los cambios económicos debido a que representan un peligro para sus formas de control de los trabajadores y para sus privilegios; pero a la par esos privilegios de la burocracia y sus mecanismos de manipulación de los trabajadores, resultan demasiado caros para el aparato económico. El ejemplo más conocido es el del charrismo gangsteril de Pemex proijado por el sistema político, donde el contratismo, el tráfico de plazas, la creación de plazas innecesarias, la manipulación de los ascensos escalafonarios, han sido, entre otros, los mecanismos más utilizados para mantener el sistema corporativo.

El otro conflicto político que ha enfrentado el proceso de modernización económica es su falta de credibilidad. ¿Cómo creer en una modernización económica que se basa en la antidemocracia y manipulación sindicales y en el fraude electoral en todos los niveles de la vida política nacional? ¿Cómo creer en una modernización que se fundamenta en la ampliación de la miseria de los asalariados? Fueron imperativos de esta dimensión los que llevaron a Salinas de Gortari a manifestarse por la reestructuración política. Sus discursos en ese ámbito mostraban una aparente coherencia. Sin embargo no resistieron la primera prueba: las elecciones de 1988. El fraude con toda su carga de arcaísmo se impone por sobre la voluntad ciudadana, la cual resulta burlada.

Habiendo ocupado la silla presidencial Carlos Salinas insistirá en torno a su proyecto de modernización política, aunque ya tendrá un menor eco debido a los sucesos de 1988. De esta forma en el Plan Nacional de Desarrollo propone un “Acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática”, cuyo eje es el “Perfeccionamiento de los procesos electorales y ampliación de la participación política”, donde “El respeto al voto es condición esencial de toda democracia”.¹⁹ Esta nueva declaración de fe tiene el mismo final que la primera, según lo constatan los fraudes electorales que siguieron en diversos estados de la República, como Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Durango, Veracruz y Campeche.

Las promesas de modernización política también incluían el respeto e impulso a las organizaciones sociales. En *El reto de la democracia* Carlos Salinas anota que “La democracia nos exige también reconocer la nueva pluralidad social, que se expresa en un ánimo de mayor y mejor participación, organización y representación. Es innegable que al lado de las formas políticas de participación, nuestra acelerada transformación ha hecho posible el surgimiento de agrupaciones sociales que tienen como objetivo no sólo la política, sino también mejorar la vida cotidiana de la comunidad y que demanda legítimamente, oportunidades y condiciones de participación, interlocución y decisión sobre los asuntos públicos”.²⁰

En el PND es retomada esa tesis con el supuesto fin de impulsar la participación ciudadana: “El país requiere del fortalecimiento de estas organizaciones, que representan un elemento fundamental en la consolidación de una cultura democrática, y son instrumentos efectivos de expresión ante sociedad y gobierno, e instancias útiles para la concertación”.²¹

El trato gubernamental dado a las organizaciones sociales lo ilustran los casos de los sindicatos de las empresas Ford, Modelo, Tomel o el de la COR; lo mismo puede apreciarse en las palizas concertadoras propinadas a los vendedores ambulantes en la ciudad de México y en otras ciudades del país, como en Puebla; o también está el caso de los defensores de los derechos humanos, como Norma Corona que fue arteramente asesinada, y después de meses de cometido ese crimen sus autores no han sido detenidos.

Ni quien dude que la reestructuración económica (decidida e instrumentada desde arriba sin tomar para nada la opinión de la población que es la más afectada por la misma) avanza a marchas forzadas, pero a la vez la modernización política sólo ha quedado al nivel de los discursos y programas oficiales, porque en la experiencia política nacional está ausente. Como bien dice Wayne A. Cornelius —conocido estudioso estadounidense de la realidad mexicana, y en los últimos tiempos vehemente e incondicional propagandista y defensor a ultranza del salinismo— “La liberalización económica ha sido extraordinariamente rápida con Salinas. En contraste, la reforma política tiene la lentitud de un caracol, y con muchos reveses en el trayecto”.²²

La modernización política no sólo avanza a pasos de caracol, sino que en el camino aún le meten zancadillas diferentes integrantes de la clase política priísta, como Fidel Velázquez. Obviamente la resistencia de los dinosaurios priístas en contra de los cambios políticos que está instrumentando el salinismo, no obedece al deseo de salir en defensa de los intereses populares o con una perspectiva nacionalista, sino para preservar sus privilegios económicos y políticos, lo cual se transforma en una fuerte y violenta pugna entre las diferentes camarillas que integran ese organismo político, y que también tienen profundas raíces en el aparato estatal. Cornelius anota que “los obstáculos más importantes a la liberalización política en el México de hoy permanecen en el interior del PRI”.²³

Pero no sólo la resistencia de los dinosaurios políticos es lo que ha permitido que el viejo corporativismo siga manteniendo el poder que aún detenta en los sindicatos y en el aparato político, o que el fraude electoral —tan viejo como el propio PRI y su abuelo el PNR— siga siendo el mecanismo que permite al PRI detentar triunfos que le corresponden a los partidos opositores. La pervivencia de todo ese arcaísmo político también se explica por la incapacidad del salinismo de estructurar una nueva forma de sindicalismo que desplace al viejo charrismo e igualmente muestre en los hechos su disposición a desarrollar un liberalismo electoral que permita que los triunfos o derrotas se definan en una libre concurrencia electoral, donde la última palabra la tenga el ciudadano a través del sufragio. En una lid electoral de esta naturaleza, todos los partidos tendrían que participar en igualdad de condiciones, sin que haya uno, como actualmente sucede, que cuente con todos los recursos del Estado para desarrollar su actividad.

De esta forma, la modernización del sistema político tiene que partir del fin del partido de Estado. El PRI puede seguir existiendo si cuenta con la fuerza y capacidad suficiente, propias, lo cual demostraría al concurrir libre y abiertamente, como el resto de los partidos, al mercado electoral.

A pesar de todos los discursos y declaraciones del salinismo, a través de los cuales se habla de los avances de la modernización política, en los hechos lo que está sucediendo es un endurecimiento del régimen político. Esto se ve cotidianamente en una mayor restricción de las libertades democráticas, en un menor respeto a los derechos humanos,

en un mayor fraude electoral —en el que únicamente se han modernizado sus métodos, como lo muestra la integración del rasurado del padrón electoral y la selección meticulosa de los ciudadanos en función de sus preferencias políticas para así entregar o no las credenciales de elector—, en un permanente ataque a las libertades sindicales y en una cotidiana marginación de la ciudadanía de las principales decisiones políticas y económicas que afectan a todo el país y a la soberanía nacional.

A falta de legitimidad democrática del régimen político, su autoritarismo en todos los niveles muestra una grave tendencia a acentuarse. Diversos analistas y dirigentes sociales han llamado la atención al respecto desde el mismo fraude electoral de 1988, planteando que esta dinámica inevitablemente conducirá a la violencia represiva.

Pensar para transformar

Desde 1982 la ofensiva reestructuradora avanza en contra de los intereses de los trabajadores. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid la inmensa mayoría de la población fue agravada con las políticas oficiales, tanto al nivel económico como político. La demostración del hartazgo que esas políticas habían causado se vio en las elecciones de 1988, cuando el candidato priísta a la presidencia del país era nada menos que el titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, artífice fundamental de la reestructuración económica y de todas sus negativas consecuencias contra la mayoría de la población del país. El resultado fue más allá de lo que incluso la oposición esperaba, el PRI fue derrotado en las urnas.

Impuesto en la silla presidencial, Carlos Salinas de Gortari se ha abocado a profundizar lo que ahora denomina modernización económica, con la creciente miseria para la mayoría de la población. La resistencia de los trabajadores se mantiene, con sus altas y bajas, en las batallas en las fábricas, en las escuelas, en las oficinas, en las colonias pobres y en los ejidos. Quizá nuevamente la gente espera las elecciones federales de 1991 y especialmente las de 1994 para presentar la factura a Salinas de Gortari y al PRI.

En las luchas cotidianas se ha podido observar que no obstante los roces entre los charros sindicales y el gobierno salinista, ambos tienen como enemigo común a los trabajadores, ante quienes cierran filas, como se ha constatado en las huelgas de los asalariados de Ford y Modelo. De esa forma el gobierno con la Secretaría del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y las fuerzas represivas se alían con la burocracia sindical y con los patrones para enfrentar a los trabajadores.

A pesar de que la política oficial quiere a un ciudadano pasivo que acepte sin chistar todas sus medidas económicas y políticas, en los hechos se ha dado lo contrario, la población se opone y resiste a ellas. La participación ciudadana se manifiesta en muy diversos niveles, no sólo en el ámbito electoral, al calor de las confrontaciones, quienes resisten las políticas gubernamentales cada vez tienen más claro que

también se requiere un gran trabajo de reflexión para ir creando las alternativas que se deben plantear en todos los niveles, a las políticas oficiales. Una nueva realidad se vive tanto a nivel nacional como internacional, los anteriores modelos o esquemas políticos quedan cortos, por lo que se hace indispensable la reflexión colectiva que permita estructurar un proyecto de modernización del país no excluyente como el salinista, sino que sirva para beneficiar a los trabajadores y pobres que hoy languidecen de hambre debido a las políticas gubernamentales, y que asimismo permita preservar la soberanía nacional, hoy tan vulnerada por el entreguismo oficial a los intereses imperialistas.

Muchas y grandes interrogantes se están debatiendo en la actualidad. ¿Cómo enfrentar inteligentemente la reestructuración del proceso de trabajo, de tal forma que se logre una mayor productividad pero con mejores condiciones de vida para los trabajadores? ¿Cómo reestructurar las organizaciones sindicales teniendo como punto de partida la democracia y la independencia sindicales? ¿Cómo transformar a los sindicatos independientes, que en mucho se encuentran anquilosados, para que sean instrumentos adecuados en las batallas contra la modernización excluyente del salinismo? ¿Cómo redinamizar a las corrientes y direcciones sindicales democráticas para que sean factor fundamental en los cambios que el sindicalismo requiere? ¿Cómo plantear alternativas innovadoras más allá de los usos y costumbres paralizantes?

¿Cómo crear un proyecto de reestructuración de la educación a todos los niveles, que tenga como punto de partida el principio constitucional de la enseñanza obligatoria y gratuita? ¿Cómo prepararse para la defensa del ejido buscando insertarlo en una dinámica de mayor productividad con base en amplios apoyos estatales? ¿Cómo crear una reforma urbana integral que garantice casa digna a todos los trabajadores y pobres del país? ¿Cómo avanzar en la democratización de la sociedad partiendo de terminar con el régimen de partido de Estado? ¿Cómo combinar las luchas electorales con las batallas en los centros de trabajo y de residencia?

En torno a esas y otras interrogantes la sociedad está desarrollando una amplia reflexión colectiva. Foros, seminarios, encuentros y demás eventos dan cuenta de ello. Una buena cantidad de revistas, libros y documentos sueltos han sido publicados con las ponencias y resultados. Por diversas vías la ciudadanía demuestra su enorme interés por tener una mayor participación en las transformaciones que se están operando en el país. Así, la resistencia contra la ofensiva salinista se está dando tanto en el plano de las luchas concretas en los centros de trabajo y de vivienda como en el plano de las ideas.

Notas

¹ Véase, Luis Javier Garrido, *El partido de la revolución institucionalizada*. México, SEP, 1986, especialmente los capítulos II y III. También está de Robert K. Putnam, *El partido de la revolución y la estabilidad política en México*. México, UNAM, 1982, pp. 23-32.

² Véase, John Skirius, *José Vasconcelos y la cruzada de 1929*. México, Siglo XXI, 1982, p. 170.

³ Daniel Cosío Villegas, *El sistema político mexicano*. México, Joaquín Mortiz, 1974, p. 71.

⁴ Entre otros están los siguientes trabajos: José Luis Reyna, "Estado y autoritarismo", en *Nueva Política* (2), abril-junio de 1976. En la misma revista puede consultarse el ensayo de Víctor Flores Olea, "Notas sobre política mexicana", Manuel Camacho, "El futuro inmediato", en Siglo XXI, *La clase obrera en la historia de México*, v. 15, México, 1980. Carlos Pereyra, "Estado y movimiento obrero", en *Cuadernos Políticos* (28), abril-junio 1981. De varios autores está el libro *Tres estudios sobre el movimiento obrero en México*. El Colegio de México, 1976.

⁵ Esta parte la he desarrollado en el ensayo mencionado en la nota 4, pp. 53-54.

⁶ Por ejemplo, Lorenzo Meyer dice que la legitimidad del gobierno y del Estado "no se logró por la vía de las urnas...vía que existió sólo en teoría y nunca en la realidad—sino por la eficiencia gubernamental en el manejo de las relaciones y contradicciones corporativistas", esa eficiencia permitió el crecimiento económico que dio al Estado recursos para lograr que "pese a su muy desigual distribución, significó un aumento neto en los niveles de vida... El corporativismo mexicano en los tiempos del neoliberalismo", en *Estado y sindicatos, crisis de una relación*. México, UAM-Friedrich Ebert, 1989, pp. 25-26.

⁷ Véase Arturo Anguiano, "El desenlace del corporativismo", en *Estado y sindicatos...*, op. cit. El autor anota que la crisis "sacó a flote en los setenta el disfuncionalismo creciente del conjunto del régimen político articulado por el dominio corporativista".

⁸ Véase, Héctor Guillén Romo, *Orígenes de la crisis en México 1940-1982*. México, Era, 1984. José Blanco "El desarrollo de la crisis en México, 1970-1976", en Rolando Cordera (comp.) *Desarrollo y crisis de la economía mexicana*. México, FCE, 1981.

⁹ Véase, *Investigación económica*, nueva época, 3 y 4, en los que se reúnen trabajos que analizan desde distintas temáticas el periodo de Luis Echeverría.

¹⁰ Véase, Carlos Monsiváis, "La ofensiva ideológica de la derecha" en *México Hoy*, México, Siglo XXI, 1979. Carlos Ariola, *Los empresarios y el Estado*, SEP 80, 1981; especialmente el capítulo II, "Los grupos empresariales frente al Estado (1973-1975)". Julio Labastida (comp.), *Grupos económicos y organizaciones empresariales en México*. México, Alianza Editorial Mexicana-UNAM, 1986; especialmente el capítulo IV, "Los empresarios y la política".

¹¹ Véase, Heberto Castillo, *Pérez, S. P. P. México*. Proceso, 1981.

¹² Al respecto son elocuentes las siguientes palabras de Jesús Reyes Heróles: "No debe haber sindicatos manejados por partidos políticos que den un sello político a acciones estrictamente sindicales, o que encubran propósitos y objetivos netamente partidistas. Al ocurrir ello, de la huelga laboral, incluso por solidaridad, se puede pasar a [legal pero político]. *UnomásUno*, 4 de diciembre de 1978.

¹³ Véase Arturo Anguiano, "La izquierda en su nado", op. cit. Julio Moguel, *Los caminos de la izquierda*. México, Juan Pablo, 1987. También mi trabajo mencionado en la nota 4.

¹⁴ Véase aparte de la bibliografía de la nota anterior, Adolfo Gilly, *México, la larga Travesía*, op. cit. pp. 166-170.

¹⁵ Véase, Adolfo Gilly, *Nuestra caída en la modernidad*. México, Joan Boldó i Climent, 1988.

¹⁶ Véase, Alejandro Alvarez, *La crisis global del capitalismo en México 1968-1985*. México, Era, 1987; Cap. IV, "Crisis, austeridad e implicaciones político-sociales del cambio estructural 1982-1985". Carlos Tello (Coord.), *México: informe sobre la crisis (1982-1986)*. México, UNAM, 1989. Pablo González Casanova y Héctor Aguilar Camín (Coord.), *México ante la crisis. El impacto social y cultural/Las alternativas*. México, Siglo XXI, 1987.

¹⁷ Interesante fue el debate que sobre este tema se desarrolló en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (el cual concluyó en la ruptura de éste), compilado en *Por una alternativa socialista para los trabajadores*. México, ed. autores, 1989.

¹⁸ Carlos Salinas de Gortari, *El Reto*. México, Diana, 1988, pp. 38 y 40.

¹⁹ Carlos Salinas de Gortari, *Plan Nacional de Desarrollo*. Suplemento en todos los diarios nacionales.

²⁰ Carlos Salinas de Gortari, *El Reto*, op. cit. pp. 54.

²¹ Carlos Salinas de Gortari, *Plan Nacional...*, op. cit.

²² Wayne A. Cornelius, "El PRI en la encrucijada", *Nexos*, (149): 74, mayo 1990.

²³ *Ibid.*